

CONFLICTO Y REGION



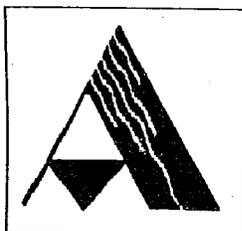


TRANSFORMACION RURAL, VIOLENCIA POLITICA Y NARCOTRAFICO EN CORDOBA, 1953-1991

MAURICIO ROMERO*

Center for Studies of Social Change
New School for Social Research

*1 Mauricio Romero es candidato a doctor en Ciencia Política e Historia, en el New School for Social Research, de New York. Esta investigación formó parte del proyecto Conflicto Social y Violencia, adelantado en el CINEP entre 1988 y 1990. El trabajo empírico se llevó a cabo en Bogotá, Medellín, Montería y Tierralta, en donde se efectuaron entrevistas con políticos, líderes locales y participantes en los eventos políticos del departamento de Córdoba en las últimas décadas, y en donde se consultó prensa y se revisó literatura local. Una primera versión de este artículo circuló como Documento de Trabajo # 183, Center for Studies of Social Change, CSSC, New School for Social Research, marzo de 1994. Los comentarios de Charles Tilly, director del CSSC, Julie Franks y Michel Stoddard beneficiaron enormemente la presente versión. La corrección de estilo fué realizada por Alvaro Carvajal A.



Algunos narcotraficantes acumularon tal cantidad de propiedad rural en Colombia durante la década de los 80, que pudieron darse el lujo de iniciar una reforma agraria por su cuenta. Fidel Castaño, miembro de la cúpula del antiguo cartel de Medellín, prometió distribuir 18.000 hectáreas de tierra a campesinos pobres en el valle del río Sinú en 1990 y un año más tarde ya había entregado cerca de 7.000 hectáreas a 1.500 familias en el medio y alto Sinú. Además, sus parientes cercanos organizaron la *Fundación por la Paz en Córdoba*, con el fin de implementar un programa de ayuda técnica y financiera para los beneficiarios de la redistribución de tierras, e incluyeron en la junta directiva de la fundación a antiguos guerrilleros que se habían enfrentado a Castaño en una guerra a muerte durante la década anterior².

Fundador de los escuadrones paramilitares en el noroeste de Colombia en los años 80 y comandante de la organización nacional de grupos paramilitares en los 90, Castaño ya había construido una base política en el Sinú, Urabá y el Magdalena medio, cuando buscó una tática amnistía frente a las acusaciones de asesinar políticos de izquierda y sus simpatizantes, campesinos en su gran mayoría. La no persecución a Castaño se materializó temporalmente como parte del prolongado, parcial, y en parte fallido proceso de paz entre las guerrillas izquierdistas y el gobierno colombiano en la década de los 80. Con el perdón tácito obtenido con la distribución de tierras, Castaño aseguró su posición como un agente efectivo, no oficial, de la política contrainsurgente del ejército y como un caudillo anticomunista en el noroeste colombiano, útil para los "duros" en el gobierno central. Sus escuadrones paramilitares dicen estar peleando contra el comunismo desde la mitad de los años 80, aunque de paso también han barrido literalmente de radicales, reformadores, activistas de base y líderes campesinos vastas zonas rurales del país.

Este artículo sugiere un marco de interpretación de la violencia política de los años 80 en el departamento de Córdoba, basado en el análisis del cambio a una agricultura comercial y del crecimiento de la ganadería extensiva en tres zonas del valle del Sinú entre 1953 y 1990, y en el papel que ha jugado el narcotráfico en la dinámica política que acompañó a esta vía de modernización agraria. El estudio separa analíticamente tres procesos que están íntimamente relacionados: 1) la reconfiguración de los sistemas políticos locales³ como resultado del cambio a una agricultura comercial y de la extensión del latifundio ganadero; 2) el nivel de resistencia a la trayectoria de cambio socioeconómico⁴ y la polarización de campos de fuerza política en las regiones;⁵ 3) cambios en la estructura de oportunidad política,⁶ los cuales favorecen la movilización de actores y la afirmación de sus intereses e ideologías. El argumento desarrollado sostiene que es probable que la violencia política ocurra cuando en el proceso de modernización agraria el sistema político local enfrenta alteraciones significativas,⁷ existe una reacción enérgica de los afectados por la trayectoria de ese cambio basada en la concentración de la tierra y cuando ocurren variaciones políticas o de alianzas a nivel nacional, o también de la forma de intervención del Estado central en las regiones que permiten oportunidades o promueven la movilización de actores locales.

El estudio compara las transformaciones sociopolíticas que acompañaron la vinculación más estrecha de tres regiones en Córdoba al mercado del interior y de la Costa Atlántica del país. En las dos primeras, los municipios de Montería y Tierralta, el análisis se centra en los años 80. En la tercera, la Ciénaga Grande, el trabajo se refiere principalmente a los años 60, cuando se consolidó la estructura agraria y el sistema político local actual. El argumento indica que en Montería y Tierralta, el medio y alto Sinú respectivamente, el faccionalismo político y la fragmentación de las élites favoreció el protagonismo político de los grupos insurgentes y de la izquierda legal. Este hecho, junto con la polarización del campo de fuerzas políticas de la región

contribuyó a una enérgica reacción contrainsurgente y paramilitar en la segunda parte de los años 80, liderada por la coincidencia del enemigo entre las fuerzas de contrainsurgencia del ejército y los narcotraficantes, ahora convertidos en terratenientes. Las negociaciones de paz entre las organizaciones armadas y el gobierno en la década de los 80 y la primera elección de alcaldes por voto directo en 1988, abrieron oportunidades de reconfiguración de los sistemas políticos locales, al promover la movilización de campesinos, ganaderos, comerciantes, empleados urbanos, narcotraficantes y rebeldes interesados en afirmar sus intereses e ideologías y en aprovechar las nuevas condiciones de funcionamiento del sistema político local.

En la tercera región, el triángulo formado por Cereté, Ciénaga de Oro y Lorica, en el bajo Sinú, la consolidación del latifundio y de grandes unidades de agricultura comercial ocurrió en los años 50 y 60, con amplia resistencia campesina al desalojo de la tierra, aunque la ausencia de aliados políticos importantes y la intensa represión derrotó las aspira-

ciones campesinas. El sistema político local no tuvo variaciones significativas durante el proceso de comercialización en estas tres ciudades; los alcaldes no eran elegidos por voto directo, sino nombrados por los gobernadores, quienes eran a su vez escogidos directamente por el Presidente, y la ausencia de rivales políticos de la izquierda no contribuyó a la polarización política, como sí ocurrió en Montería y Tierralta dos décadas después: La resistencia armada a las configuraciones de poder de las élites de la tierra era inexistente en esos días y por esto la reacción contrainsurgente o paramilitar fue innecesaria, al limitar considerablemente la violencia política en el bajo Sinú durante la transformación de su sistema agrario. Estas variaciones en los efectos políticos del cambio a una agricultura comercial dentro del valle del Sinú entre 1953 y 1990, sugiere una forma de aproximarse al análisis de la violencia política en aquellas regiones del país en donde las estructuras agrarias están en proceso de cambio, particularmente en las zonas de colonización en donde el conflicto armado ha sido más intenso.

² Victor Negrete (1991).

³ El sistema político local (local polity en inglés) es definido como el conjunto de competidores por el poder que rutinaria y exitosamente reclaman el aparato estatal para ellos y por los contendores que están fuera de los arreglos institucionales y políticos vigentes y que de una forma irregular y poco exitosa reclaman el aparato estatal para sí. El Estado es definido como la organización que controla los principales medios de coerción dentro de un territorio y es influenciado directamente por los competidores exitosos, ver Tilly (1986).

⁴ La trayectoria de cambio a una agricultura comercial basada en la concentración de la tierra en Córdoba delineó un perfil de conflicto en el que la respuesta campesina previsible. Sin embargo, este patrón de cambio no conduce por sí mismo a un enfrentamiento entre campesinos y terratenientes. La movilización colectiva es producto de un proceso histórico de construcción cultural y político en el que los actores recrean sus identidades. El examen de tres dimensiones sobre cómo diferentes actores construyen representaciones del mundo y sus posibilidades de acción —quejas individuales derivadas de la vida rutinaria y de la fricción con las estructuras de autoridad, memoria colectiva de abusos y opresión, y el entendimiento abstracto sobre el sentido de la acción del Estado y de la historia— puede dar claridad sobre las diferentes respuestas de aquellos actores involucrados en el conflicto por la tierra, Beth Roy (1994). Para otra aproximación a la acción colectiva y a las identidades que hace énfasis en la experiencia, ver Ira Katznelson (1986).

⁵ La polarización de un campo de fuerza política se define durante la formación de las identidades y la articulación de ideologías y perspectivas del mundo las cuales son la base de la acción colectiva de los agentes sociales. Estas identidades e imágenes son relacionales y cambian con la interacción entre los grupos en oposición y conflicto. Así, las identidades políticas e ideologías de las élites dominantes se reestructuran según sea la intensidad de la resistencia de los grupos subalternos a la dominación, al igual que éstos recrean las suyas a través del mismo proceso, ver Margaret Sommers (1992).

⁶ El papel del Estado es clave en la creación de una horizonte de oportunidades o de obstáculos para la movilización colectiva. En el caso del departamento de Córdoba, los factores que moldean una estructura de oportunidad estuvieron presentes en grados diferentes en el período de análisis: estabilidad/inestabilidad de las alianzas políticas, grado de apertura del sistema político local, posibilidad de alianzas y apoyo de otros grupos de los sectores en rebelión, divisiones dentro de las élites y la capacidad del gobierno de implementar políticas, Sidney Tarrow (1989). Los efectos de las variables internacionales, a través del conflicto de la «guerra fría», tuvo un papel importante en Córdoba en los años 80, aunque en general sus efectos en la estructura de oportunidad política ha recibido poca conceptualización hasta el momento, David S. Meyer (1994).

⁷ Cuando la distribución de poder está siendo reajustada, los actores políticos afirman sus intereses vigorosamente, e incrementan la probabilidad de la violencia colectiva. «Los momentos más intensos de violencia son esperados cuando los actores entran y salen del sistema político», James Rule (1988): página 176.



REGIONES, SISTEMAS POLÍTICOS LOCALES E IDENTIDADES

Muchos de los análisis de la violencia política en las áreas de colonización en el sureste del país y en los valles interandinos presentan una visión vívida y compleja de la migración campesina y del conflicto.⁸ Sin embargo, no han sido muy comunes los análisis causales y diacrónicos. Los estudios realizados tienden a dejar de lado el desarrollo histórico de las fronteras, el cual muestra los diferentes momentos de la privatización de tierras públicas y las dificultades inherentes en la consolidación de una economía parcelaria.⁹ LeGrand indica que antes de los años 50, el conflicto rural era generalmente canalizado a través de instrumentos legales y las coaliciones nacionales que llegaron a la presidencia implementaron políticas progresistas para el campo. De los años 50 en adelante la situación cambió radicalmente; los campesinos empezaron a “desconfiar del gobierno central”, las condiciones variaron con el crecimiento de los grupos guerrilleros desde los años 70 y la expansión de la producción y comercio de coca y la reinversión de las narcoutilidades en propiedad rural, especialmente en ganadería en los años 80.¹⁰

LeGrand sugiere que la forma violenta y armada de la expresión del conflicto socioeconómico en la frontera agrícola colombiana en la última década tiene que ver con la lucha por la tierra, la presencia de grupos guerrilleros y el comercio y cultivo de coca, o la inversión en tierras por narcotraficantes. Sin embargo, la autora no señala a través de qué mecanismos específicos se desenvuelve dicho conflicto. El análisis del caso de Córdoba presentado en este artículo indica que la dinámica de las estructuras políticas locales es el campo de fuerza en el cual se desarrolla esa confrontación.

Las aproximaciones regionales centradas en la dinámica de los sistemas políticos locales permiten

una mirada más nítida de las fuerzas en conflicto, a diferencia de las miradas nacionales, las cuales no dan cuenta de variaciones regionales ni permiten hacer conexiones analíticas para someter a discusión mecanismos explicativos sobre tales variaciones de la violencia rural. La comparación entre el tipo de conflicto que acompañó la comercialización de la agricultura en las tres regiones del río Sinú sugiere relaciones entre comercialización agraria y reconfiguración de los sistemas políticos locales y entre éstos y modificaciones en la estructura de oportunidades políticas, resultado de variaciones en las coaliciones nacionales en la presidencia, o de la forma de intervención del Estado central en las regiones. Esta conexión analítica entrelaza los dominios nacional y local y permite examinar cómo las transformaciones locales interactúan con oportunidades creadas por cambios en contextos más amplios. Además, esta conceptualización también incluye en el análisis los efectos del sistema internacional en las dinámicas internas al llamar la atención sobre las relaciones entre los actores locales, nacionales, e internacionales,¹¹ en lugar de tratar de ponderar el peso de los factores nacionales en oposición a las variables internacionales, o viceversa.

Daniel Pécaut, estudioso de la política colombiana y analista agudo de su evolución, enfatiza la “debilidad del Estado”, la insuficiente institucionalización de los conflictos y la falta de regulación estatal de la sociedad como las principales fuentes de la persistente violencia en Colombia. Una mayor capacidad y alcance del Estado sobre la población sería un paso definitivo en la disminución de la violencia, de acuerdo con el argumento de Pécaut.¹² Aunque el razonamiento apunta a inocultables características de la capacidad del Estado colombiano, es descriptivo y no sugiere ningún mecanismo explicativo del fenómeno. Además, esta forma de aproximarse al problema no permite explorar variaciones regionales de la violencia o explicar por qué la confrontación armada se extendió a algunas partes de la zona cafetera en los años 90, localizadas en el corazón de la economía colombiana y donde

existe un aparato de mediaciones institucionales bien desarrollado.

En escritos recientes, Pécaut abre una importante veta de exploración y señala la incapacidad estatal para crear una imagen simbólica de unidad nacional, o "una representación unitaria del orden político y social."¹³ En este argumento, la fragmentación cultural o ausencia de "similitud cultural" sería la fuerza motriz detrás de la persistencia de la violencia política en Colombia. Este autor sugiere que las representaciones políticas con las cuales los actores enfrentados evocan y recrean la memoria colectiva de la violencia de los años 50, perpetúan una imagen del orden social y político en el cual la violencia ocupa un lugar central.¹⁴ Si bien el razonamiento es sugestivo y se refiere a aspectos culturales y de formación de identidades hasta el momento poco explorados, Pécaut no indica cómo esa memoria e identidad colectivas interactúan con los conflictos del presente, y el desarrollo del argumento tiende a disminuir o ignorar el peso causal en la explicación de la violencia política de los conflictos surgidos tras las disputas por el dominio del poder institucional local, las variaciones en políticas o en las coaliciones nacionales en el gobierno y sus efectos locales, la autonomía militar frente al control ciudadano y los factores internacionales.

Un comentario similar puede hacerse de los enfoques que acertadamente han buscado examinar procesos sociales más "micro" y han planteado como hipótesis explicativa de las confrontaciones

violentas los roces entre distintas comunidades socioculturales, producto de la particular forma de poblamiento del territorio nacional y de los flujos migratorios correspondientes.¹⁵ En esta perspectiva, las adhesiones partidistas y el activismo político tienden a estar subordinados a decisiones tácticas de comunidades con diferentes formas de cohesión social y que interactúan en un mismo espacio geográfico y la alineación con redes políticas más amplias --partidos nacionales-- es función de esas decisiones. Falta por investigar con más detalle cómo han sido afectadas esas comunidades por los procesos de diferenciación social de la modernización económica, cuáles son las jerarquías de autoridad que funcionan dentro de ellas, y su permeabilidad hacia ideologías de clase, religiosas o de otro tipo de identidades. En suma, hay que investigar cómo es el campo de fuerza político de esas comunidades socioculturales y cuál es el proceso por el cual se enfrentan unas con otras.

En la misma dirección que los autores mencionados antes, aunque con un mayor peso a los cambios en las estructuras políticas locales y sus relaciones con contextos más amplios, este artículo explora la formación de identidades a través del conflicto político y social, y la conformación y polarización de campos de fuerza políticos en las regiones. El análisis de las relaciones sociales entre los grupos en competencia y oposición en Córdoba, las redes de poder a las que están vinculados y las narrativas que generan para dar sentido a su acceso

⁸ Jaime Eduardo Jaramillo, Leonidas Mora, y Fernando Cubides (1986); Alfredo Molano (1987); Ibán de Rementería (1986).

⁹ Catherine LeGrand (1989, 1986).

¹⁰ LeGrand (1989): 14-24.

¹¹ La relación de disputas locales con enfrentamientos estratégicos generalmente contribuye a ahondar esos conflictos locales y la probabilidad de choques violentos, en particular cuando actores armados están en conflicto, como es el caso de las luchas revolucionarias y la respuesta contrainsurgente del gobierno atacado. Estas confrontaciones, como la de la «guerra fría», presumen partes en una disputa de «todo o nada», y la identidad de cada una de las partes en conflicto implica la desaparición de su contrario, o de ese «otro», el cual es representado como diferente y peligroso. Para un análisis de la doctrina de la seguridad nacional y la ayuda y asistencia militar de los Estados Unidos a las fuerzas militares y de seguridad colombianas, ver Francisco Leal (1992).

¹² Daniel Pécaut (1994, 1992, 1988).

¹³ Daniel Pécaut (1992).

¹⁴ Pécaut (1994): página 14.

¹⁵ Fernán González (1994).

a los recursos materiales y a su papel en la sociedad, revelan sus puntos de vista normativos y el grado de polarización del campo de fuerza político. Además, la exploración de cómo los individuos experimentan su pertenencia a un grupo social y su identidad, contribuye a explicar el conjunto de ideas acerca del mundo y la percepción de su localización en él y que los individuos de cada grupo comparten como propio.¹⁶ El estudio de la violencia política en el departamento de Córdoba a finales de los años 80 indica cómo políticas ambiguas sobre derechos humanos del gobierno central, y la excesiva autonomía de los militares frente a la ciudadanía en asuntos de seguridad interna, así como su enfoque estrecho y exclusivo en el "enemigo interior", tuvieron devastadores efectos en la agudización de la violencia política en las regiones. Los nuevos propietarios rurales, surgidos de la reinversión de las narcotulidades, asumieron esa ambigüedad del gobierno central como una señal tácita y aquiescente de sus supuestos antidemocráticos sobre cómo debería ser el orden local y su papel en él.

El marco histórico de este trabajo retoma mucho de la relación frecuentemente citada entre trayectorias de modernización rural y formas políticas.¹⁷ Abundante literatura se ha publicado sobre su aplicabilidad en regiones diferentes a los países capitalistas avanzados y la periferia europea.¹⁸ En Colombia, las élites rurales han tenido, tradicionalmente, una enorme influencia en el régimen político y la reinversión de las ganancias del narcotráfico en extensas propiedades rurales alrededor del país, junto con el papel de estos nuevos terratenientes en la política de contrainsurgencia, han profundizado las características antidemocráticas del sistema político colombiano.¹⁹ El anticomunismo de los grupos paramilitares ha supuesto no sólo la represalia armada contra los que practican y difunden ideologías marxistas-leninistas, sino también el castigo a

los grupos campesinos que se han atrevido a protestar contra los efectos sociales de la transformación rural basada en la concentración de la tierra. En este sentido, el narcoparamilitarismo está recreando el autoritarismo extremo y bien conocido de las sociedades dominadas por grandes propietarios rurales, encubierto con un discurso anticomunista, retaliatorio y antidemocrático.

Claramente, los narcotráficantes, en especial aquellos agrupados en el antiguo Cartel de Medellín, jugaron un papel central en la violencia política de los años 80, al organizar y financiar grupos paramilitares en Urabá, el valle del Sinú, el bajo Cauca, el Magdalena medio y partes de los llanos orientales. Sin embargo, los efectos de la influencia de este

grupo emergente en el departamento de Córdoba son analizados en este trabajo dentro de un contexto de cambio a una economía comercial y de reconfiguración de sistemas políticos locales desde los años 50, en vez de estudiarlos como un factor o fenómeno aislado. El período entre 1953 y 1990 abarca casi 40 años en los cuales la región estrechó lazos económicos con áreas agroexportadoras y centros urbanos, al exportar ganado en pie y leche fresca y reproducir una típica



economía de exportación de materias primas. El estudio termina en 1990 cuando se inicia un nuevo período de mayores posibilidades de participación política debido a la nueva constitución de 1991 que modificó las reglas electorales para la elección de representantes al congreso, estableció la elección popular de los gobernadores, y afianzó la reforma municipal de la década pasada que autorizó la elección popular de los alcaldes. Los cambios modificaron el modelo de centralización política y la dinámica de la política institucional. Pese a ello, el paramilitarismo, la actividad guerrillera y la proliferación de armamento liviano han continuado hasta el presente con una dinámica que sugiere un marco de análisis diferente.

Durante los años 80 la violencia política se incrementó dramáticamente y se concentró en las áreas nuevas de agro-exportación, en las zonas de latifundio ganadero y agricultura comercial y en la frontera agrícola en la que campesinos desalojados del centro del país iniciaron las primeras fases de la privatización de tierras públicas.²⁰ Transformación a una agricultura comercial, insurgencia armada y respuesta paramilitar anduvieron de la mano en esta década. El liderazgo de los grupos guerrilleros y de los partidos de la izquierda legal se hizo más visible debido a su participación con el gobierno en el proceso de paz y reinserción, el cual intentó finalizar el prolongado enfrentamiento armado colombiano. No obstante, este liderazgo y sus simpatizantes no armados sufrieron una verdadera "demolición"²¹ por parte de los grupos paramilitares a través de todo el territorio del país. Aproximadamente 30.000 activistas políticos y miembros de organizaciones de base fueron asesinados por fuerzas paramilitares y de seguridad en la segunda parte de esta década. "La represión a la izquierda colombiana y la magnitud de sus pérdidas no tiene paralelo en la historia reciente de Latinoamérica", aún si se compara con la "guerra sucia" en el Cono Sur y en El Salvador.²² Este resultado es paradójico, dados los recientes, y hasta el momento exitosos procesos de reconciliación en Centroamérica y Suráfrica, lo

cual hace pensar en la explosiva mezcla entre narcoterratenientes y la doctrina de seguridad nacional de las fuerzas armadas colombianas, basada en la estrecha y anticuada doctrina de la contrainsurgencia anticomunista.

El departamento de Córdoba fue una de las regiones en donde se presentaron varios de los hechos de violencia política más graves a finales de los años 80 y aunque ésta disminuyó en los 90, el departamento continuó siendo una de las zonas más conflictivas del país, dada la hegemonía de los grupos paramilitares en su territorio. Montañoso y aislado por el sur y el oeste, esta parte del departamento albergó a radicales y disidentes que escaparon de la represión de los gobiernos y autoridades conservadoras desde los años 30. Campesinos y guerrilleros liberales de la zona cafetera y otras áreas del centro del país migraron a Córdoba y poblaron estos parajes montañosos del departamento,²³ corriente migratoria que en los años 50 y 60 llegó hasta lo que se convertiría en la zona bananera de Urabá unos años más tarde.²⁴ El cambio a una agricultura comercial, la expansión del latifundio ganadero y la reorganización de los sistemas políticos locales, transformaciones en proceso desde los años 50 en las partes planas y más fértiles de Córdoba, fueron seguidas por una espiral de violencia en el alto y medio Sinú en los años 80.²⁵

¹⁶ Beth Roy (1994).

¹⁷ Barrington Moore Jr. (1966). Moore fue el pionero en el planteamiento de estas conexiones para explicar, por un lado, el ascenso del fascismo en Alemania y Japón como resultado de la influencia de las élites terratenientes, y por el otro, el éxito de la revolución bolchevique en Rusia como consecuencia del potencial revolucionario del campesinado.

¹⁸ Jeffery Paige (1974), John D. Stephens (1989), Mauricio Font (1990), Carmenza Gallo (1991), and Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens (1992).

¹⁹ El poder regional y local del Estado central es inseparable del poder político de los grandes propietarios de la tierra en Colombia y el departamento de Córdoba es un caso extremo en esta situación. La centralización política colombiana está basada en partidos escasamente institucionalizados, fragmentados por regiones, en los que las élites locales gobiernan sin mayores controles del Estado central. Esta ausencia de equilibrio en el ejercicio del poder, evidente durante el Frente Nacional y el uso excesivo de la represión militar para contener reclamos populares, de seguro contribuyó a forjar un patrón de conflicto en el que la violencia política ha tenido un lugar central.

²⁰ Ana María Bejarano y Alejandro Reyes (1988) y Catherine LeGrand (1989).

²¹ Jorge Castañeda, (1993): 116.

²² Ibidem.

²³ Luis de Botía y Rodolfo Escobedo, (1979).

²⁴ Claudia Steiner (1989).

²⁵ *Cien Días*, Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, 1988-1990.

Montería, Tierralta y Ciénaga Grande

El departamento de Córdoba ha sido influenciado por diferentes polos de atracción económica, los cuales han creado cuatro subregiones dentro de la misma región administrativa.²⁶ Cada región siguió un curso de desarrollo propio en los últimos 40 años, durante los cuales la demanda por ganado en pie y materias primas agrícolas se incrementó como resultado del crecimiento económico en el mercado del interior del país y la vecina Urabá, convertida ahora en emporio exportador de banana. Otro importante mercado para los productos cordobeses fueron los centros urbanos a lo largo del caribe colombiano, en particular Barranquilla.

Tres de las cuatro subregiones abarcan la zona geográfica que cruza el río Sinú: el alto, el medio y el bajo Sinú, para formar el valle del Sinú. El triángulo demarcado por los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro y Lórica, está localizado en el bajo Sinú. Conocida como la Ciénaga Grande, la región histórica y más antigua del departamento, su economía ha estado orientada hacia la costa Caribe desde los inicios del siglo XX, en el que descendientes de migrantes sirio-libaneses dominan la actividad comercial. Montería, la capital del departamento, está localizada en el medio Sinú. Con lazos comerciales con el mercado antioqueño y la costa Caribe, antioqueños, cordobeses y descendientes de siriolibaneses interactúan en este espacio, con predominio de capital "paisa", así como sus recursos culturales y organizativos. En el alto Sinú, el municipio de Tierralta es la tercera zona de comparación. Fundada en la primera década de este siglo, su dinámica económica despegó cuando la carretera a Montería fue abierta en 1953.²⁷ En los años 40 y 50, la topografía montañosa de Tierralta sirvió de refugio a campesinos liberales y a radicales que escapaban de la persecución del partido conservador en el poder.²⁸

En Montería y Tierralta, la ganadería extensiva y la concentración de la tierra fue la trayectoria de modernización rural, lo cual creó un marco socioeconómico favorable a la rebelión campesina. En

la primera, el liderazgo económico de las élites nativas fue debilitado por la desventajosa relación de intercambio con los comerciantes e inversionistas de ganado antioqueños y por la fragmentación cultural y étnica de la dirigencia económica como un todo. En la segunda, es relativamente mayor control campesino sobre la tierra, la cultura radical de la zona y la distancia de los centros de autoridad y su topografía montañosa, incrementaron las posibilidades de apoyo campesino a los grupos revolucionarios.²⁹ La dinámica del sistema político en ambas localidades fue afectada en forma distinta por la transformación en una agricultura comercial, aunque ambas tuvieron en común una fuerte resistencia armada de grupos guerrilleros desde finales de los años 70, los cuales llevaron a la zona el conflicto entre insurgencia y contrainsurgencia. En este terreno, la coincidencia del enemigo entre los grupos paramilitares de los narcotraficantes y el aparato de contrainsurgencia de las fuerzas armadas desde mediados de los años 80, contribuyó a polarizar el campo de fuerzas político en donde el espacio para negociaciones y acuerdos desapareció, para quedar en su lugar sólo la correlación de fuerzas coercitivas.

En el caso del triángulo de ciudades, Cereté-Ciénaga de Oro-Lórica, la respuesta relativamente intensiva en capital a las oportunidades del mercado, apoyada por una financiación estatal generosa, permitió un mayor control de las élites sobre el proceso de comercialización de la agricultura. La consolidación de su estructura de propiedad ocurrió en los años 50 y 60, con fuerte resistencia campesina a la exclusión de la tierra mediante invasiones y un uso recursivo de la ley. Como se dijo antes, las aspiraciones campesinas fueron derrotadas por falta de aliados políticos y represión, lo que obligó a muchos campesinos a migrar al alto Sinú y otras áreas vecinas, para recrear el mismo conflicto una década después, pero esta vez unido a los reclamos de reforma política y a las aspiraciones de poder de las organizaciones guerrilleras.

El valle del Sinú en los años 50

El nuevo sistema de carreteras construido en los inicios de los años 50 en Córdoba parte de la troncal vial que conectó el centro del país con la costa atlántica, desató una avalancha de cambios en el valle del río Sinú, al mejorar las posibilidades para el comercio con el mercado antioqueño y los puertos en el Caribe, las oportunidades de inversión, y al promover el comienzo de la agricultura comercial a gran escala y la expansión del latifundio. Cría y levante de ganado y agricultura campesina, eran la base de la economía y la sociedad en el valle del Sinú antes de la mejora de las vías de transporte.

En los años 50 la influencia antioqueña ya era considerable en el territorio de Córdoba. Pequeños comerciantes y negociantes de ganado proliferaban, pero el grupo más notorio lo constituía un poderoso grupo de inversionistas en comercio y cría de ganado de Medellín. Para agilizar el comercio entre los dos departamentos, éstos fundaron una compañía de aviación a la cual bautizaron SAM, Servicio Aéreo de Medellín.³⁰ Sus inversiones estaban localizadas en el medio Sinú y entre Tierralta y Montería a orillas del río Sinú, mientras que los pequeños y medianos negociantes habitaron las áreas urbanas. El principal objetivo de los antioqueños fue el enriquecimiento y no el asentamiento en la región; sus

ranchos fueron manejados para producir ganancia lo más rápido posible, la cual sería invertida en otros negocios en la patria chica, Antioquia.³¹ Las élites cordobesas consideraban a los antioqueños como "arrolladores en su ambición e ímpetu", mientras ellos se consideraban a sí mismos parte de una sociedad pastoril y tranquila, no fundamentada en el comercio y opulencia.³² Los políticos locales resentían esta situación. Remberto Burgos, descendiente del General conservador Francisco Burgos, victorioso en la Guerra de los Mil Días en el cambio del siglo XIX al XX, y miembro de una de las familias más poderosas del Sinú, frecuentemente se quejó de que los antioqueños compraban los mejores ranchos ganaderos, los cuales habían sido fundados y desarrollados por cordobeses.³³

Comerciantes y tenderos eran en su mayoría de ascendencia sirio-libanesa. Aunque en un comienzo ellos no fueron propietarios de tierra, usualmente invertían en cría y comercio de ganado en compañía de pequeños y medianos propietarios de tierra, los cuales no poseían suficiente capital.³⁴ Los comerciantes siriolibaneses se convirtieron en influyentes prestamistas hacia mediados de siglo, con enorme influencia en la economía y la política, aunque socialmente las élites tradicionales, muchas de ellas de ascendencia europea, se referían desdeñosamente a este grupo como "turcos". Un dicho en-

²⁶ Joaquín Berrocal (1980); Antonio De la Torre y Miranda (1794); Adolfo Meisel (1980); Gloria Isabel Ocampo (1986-88); Joseph Palacios de la Vega (1955); Eduardo Posada (1988).

²⁷ Entrevista con Alejandro Jaramillo (1989), nieto de uno de los fundadores de Tierralta y padre del primer alcalde elegido por voto directo en la misma localidad en 1988.

²⁸ Joaquín Berrocal (1980).

²⁹ Los campesinos que poseen algún control táctico sobre sus recursos son más propensos a la resistencia. Su poder se incrementa por su localización en la periferia de la influencia de los terratenientes y autoridades, su separación geográfica en áreas remotas y por diferencias lingüísticas o étnicas que aumentan la distancia de las clases dominantes, Eric Wolf (1986). Otras interpretaciones consideran que los pequeños propietarios tienden a ser más conservadores que los asalariados rurales, Jeffrey Paige (1976). El punto decisivo parece ser el nivel de coerción y si éste permite un intercambio significativo entre campesinos y los activistas revolucionarios, Theda Skocpol (1982). Así, el poder táctico de coerción y si éste permite un intercambio lejós de las autoridades centrales y de la coerción estatal, es importante para explicar la persistencia de la rebelión en algunas zonas, tal como sucede en el área montañosa del sur y el oeste del departamento de Córdoba.

³⁰ Joaquín Berrocal (1980).

³¹ Entrevista con Rodrigo García Caicedo (1990).

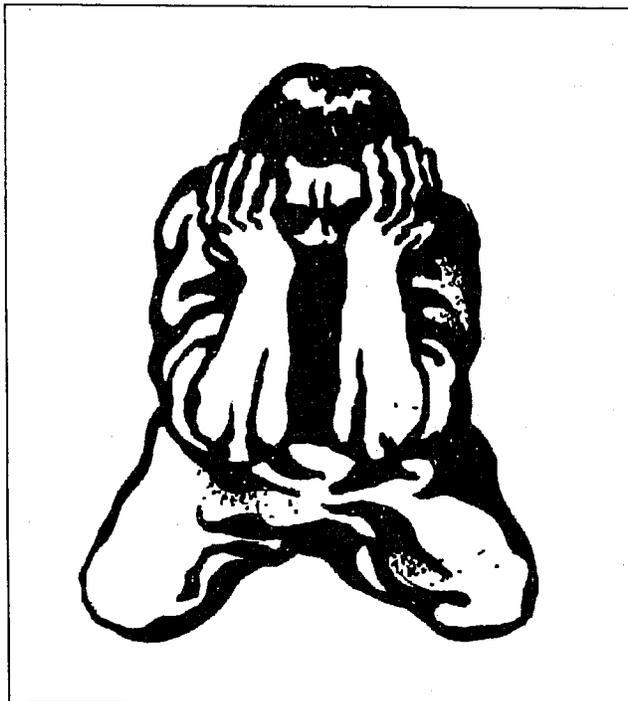
³² Entrevista con Miguel Escobar Méndez (1991).

³³ Remberto Burgos Puche (1955).

³⁴ Entrevista con Jorge Farah (1990).

tre los políticos de mitad de siglo es que para ser electo a cargos públicos, los candidatos debían tener el consentimiento del "turco del pueblo". "El compra las cosechas de los campesinos, les presta dinero o les adelanta sobre las cosechas, les vende a crédito, hace donaciones a la comunidad, etc. Los campesinos hacen lo que el Turco les dice".³⁵ Con la nueva vía que conectó el centro del país con la Costa Atlántica, los negociantes antioqueños tomaron de los siriolibaneses una importante porción de la actividad comercial en Montería; sin embargo, éstos siguieron siendo dominantes en la Ciénega Grande.³⁶

En general, en los años 50 el origen del ingreso para los propietarios rurales y campesinos todavía era la tierra, en vez del capital o los salarios. Como consecuencia de un poblamiento más reciente, Tierralta contó con una población de campesinos independientes relativamente más numerosa que las otras dos regiones, los cuales, en términos de Eric Wolf, tenían control sobre sus propios recursos y por esto, una "movilidad táctica" que los



alejaba del control de las élites terratenientes. Esta independencia se incrementó por la geografía montañosa de la zona, la distancia de Montería, el centro de la autoridad política y administrativa y la cultura radical de la zona. En el bajo Sinú, el área de poblamiento más antiguo y el centro histórico del departamento, la agricultura comercial se consolidó en una etapa más temprana que en las otras dos, sin respuesta armada y con una élite más homogénea, con mayores recursos de capital y un control más estrecho sobre el campesinado. En el Sinú medio, las fuerzas que influyeron en su desarrollo produjeron una élite fragmentada étnica y culturalmente, y un grupo dirigente nativo debilitado cultural y económicamente por la desigual relación económica con la poderosa burguesía antioqueña. Esta condición disminuyó su capacidad de liderazgo y preparó el terreno para las masivas adquisiciones de tierra por parte de los narcotraficantes antioqueños.

En términos de identidades e ideologías, el campo de fuerza político polarizado comenzó a delinearse en Córdoba en los años 50, luego que las autoridades conservadoras ordenaran a la policía atacar tres asentamientos campesinos en 1949. Sus ocupantes habían colonizado estas tierras a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las asociaciones campesinas estaban localizadas en la margen izquierda del río Sinú --Lomagrande, Canalete y Callejas-- y agrupaban alrededor de 700 familias. Sus habitantes vieron caer sus casas quemadas o destruidas, sus líderes asesinados y sus parientes dispersados.³⁷ Los conservadores del departamento aprovecharon la situación nacional conflictiva y convulsiónada y decidieron actuar en contra de lo que ellos percibieron como "amenaza comunista". Los campesinos de estas asociaciones se habían aliado con vendedores ambulantes y artesanos de Montería en un acuerdo para reclamar tierra, derechos de sindicalización y libertad de expresión, proceso en el cual también divulgaron ideologías liberales radicales, socialistas y comunistas.

El ataque fue un hecho clave en los intentos de construcción de una memoria colectiva y de comprensión del funcionamiento del Estado y del senti-

do de la historia propuesto por los grupos socialistas y comunistas en las décadas siguientes. El objetivo era movilizar a las organizaciones campesinas en contra de la alianza liberal-conservadora que forjó el régimen del Frente Nacional entre 1958 y 1974. Estos factores se combinaron con los abusos cotidianos a los que estaban expuestos los liberales, en particular los gaitanistas, los socialistas y comunistas: conceptos y juicios sesgados de las autoridades y juzgados, ausencia de derechos laborales, discriminación en contra de la familia en el momento de reclutar jóvenes para el servicio militar obligatorio.³⁸ Estas fueron algunas de las injusticias a las que estaban expuestos dichos grupos marginales. La mezcla de estos tres niveles de experiencia preparó el terreno para el desarrollo de las ideologías de los grupos guerrilleros que invitaron a la rebelión armada en los años 70 y 80 en Tierralta y Montería.



TRANSFORMACIÓN RURAL Y OPORTUNIDADES URBANAS

La represión contra los campesinos en las décadas del 40 y 50, junto con la mejora del sistema vial favoreció la consolidación del latifundio a lo largo del valle del Sinú. La agricultura comercial tomó vuelo en el bajo Sinú y en los alrededores de Montería hacia finales de los años 50 cuando cultivos de algodón, soya, ajonjolí, sorgo y arroz crecieron aceleradamente. Inversionistas antioqueños arrendaron tierras, introdujeron maquinaria agrícola e insumos agroquímicos y abrieron agencias representantes de firmas de maquinaria e insumos agrícolas norteamericanas.³⁹ El área cultivada de productos comerciales a nivel nacional se incrementó

en 166% entre 1948 y 1960, mientras el área de los productos campesinos (maíz, tabaco, frijol, yuca y plátano) aumentó entre 2.5 y 8.4% en el mismo período.⁴⁰ En los años 60, mientras el producto industrial se vio afectado por los bajos precios internacionales del café y sus efectos en la demanda interna y en la importación de insumos, la agricultura comercial creció a un sorprendente promedio anual de 12%,⁴¹ lo que reflejaba la rapidez de la transformación en el campo.

La política agraria y la coyuntura internacional también estuvieron del lado de la agricultura comercial. La coalición bipartidista liberal-conservadora diseñó un amplio programa de modernización agrícola que recibió apoyo y fondos de la Alianza para el Progreso. Aunque el programa se divulgó como una reforma agraria, la parte dedicada a redistribución de tierras fue la menos efectiva, mientras la parte que promocionó la agricultura comercial y la colonización fue exitosa. La distribución de tierras buscó pacificar las zonas afectadas por rebeliones campesinas en los años 50. El programa despertó una enérgica resistencia de los propietarios de tierras, quienes expulsaron a miles de campesinos parcelarios para prevenir posibles expropiaciones. La reforma buscaba promover el uso productivo de la tierra, como en efecto se logró en algunas zonas, aunque muchos terratenientes también simulaban actividades productivas para evitar problemas con el Estado intervencionista de finales de los 60.⁴² La oposición a la reforma fue intensa a todo lo largo de los años 60 en el congreso y las leyes que fueron finalmente promulgadas supusieron tantos tecnicismos y procedimientos que las hicieron inefectivas.

Los efectos urbanos de las posibilidades económicas que la nueva carretera abrió también fueron significativos. En Montería, en donde los tenderos siriolibaneses habían vendido tradicionalmente herramientas, telas, zapatos, drogas y alimentos en

³⁵ Entrevista con Miguel Escobar Méndez (1991).

³⁶ Joaquín Berrocal (1980).

³⁷ Víctor Negrete (1981).

³⁸ Entrevista con Pascual Orozco (1989).

³⁹ Joaquín Berrocal (1980).

⁴⁰ Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, (1973).

⁴¹ Salomón Kalmanovitz (1991).

⁴² Ibid.

un mismo local, se vieron expuestos a la competencia de los comerciantes antioqueños quienes introdujeron tiendas especializadas con calidades y diseños más modernos en confecciones, herramientas, zapatos, etc. Además, cadenas comerciales de venta al por menor, como el LEY, de Medellín, y más tarde La Olímpica de Barranquilla, abrieron almacenes en Montería y desalojaron a comerciantes nativos y siriolibaneses de parte de los negocios en esta ciudad. Los nuevos distribuidores ofrecieron descuentos, facilidades de crédito, más variedad y aprovecharon sus mejores conexiones en el resto del país. Servicios como las artes gráficas y la fotografía también fueron afectados por los nuevos sistemas llegados con los negociantes antioqueños. Hasta la venta de helados caseros desapareció como efecto de la competencia de los sistemas de comercialización de las empresas industriales de refrescos.⁴³ Aunque la ganadería continuó siendo la actividad principal, el comercio se convirtió en una actividad mucho más lucrativa y en gran fuente de riqueza. Testigos directos de las innovaciones recuerdan cómo la vida cotidiana cambió: "la gente cambió su modo de vestir y su dieta diaria. Gente nueva llegó. La sociedad se volvió más comercial. Las calles fueron pavimentadas: cambiamos del caballo al Jeep."⁴⁴

En Tierralta, la nueva carretera que la conectó con Montería en los años 50 impulsó el crecimiento económico del municipio y afectó la política local que era dominada por los descendientes de las familias fundadoras de comienzos de siglo, las cuales eran conservadores en su mayoría. Antes, la falta de comunicaciones adecuadas inhibió ambiciones y progreso. La nueva vía valorizó las propiedades de algunos y quienes aprovecharon las oportunidades de enriquecimiento se convirtieron en potentados en pocos años.⁴⁵ El comercio ofreció buenas oportunidades, en particular para los comerciantes liberales que venían de afuera y con buenas conexiones para comercializar la producción agrícola de un campesinado mayoritariamente liberal. Por ejemplo, la familia Lara, cuyos miembros han sido importantes políticos del municipio de Tierralta durante la

década pasada, llegaron al municipio como vendedores mayoristas de gaseosas y cerveza en los primeros años de la década de los 60 y terminaron llevando las cosechas campesinas a Montería unos años después. El capital acumulado en el comercio fue luego invertido en tierra y las relaciones comerciales de la familia facilitaron la entrada de varios de sus miembros en la política local en los años 70 y 80.

Así, comerciantes enriquecidos y nuevos terratenientes se convirtieron en las élites emergentes en Tierralta durante el Frente Nacional. Como el alcalde era nombrado por el gobernador en Montería, aquellos que aprovecharon sus relaciones con la capital del departamento pudieron manipular la selección en su favor. Los descendientes de las familias fundadoras que no se beneficiaron de la valorización de terrenos a lo largo de la nueva vía o quienes no pudieron aprovechar las nuevas oportunidades ofrecidas por el mercado fueron desplazados y marginalizados. Estos bautizaron "el monopolio" a la coalición de liberales y conservadores que bajo la sombra del Frente Nacional y las nuevas oportunidades económicas dominaron la política local en Tierralta.⁴⁶

En 1963, políticos liberales de Montería encabezados por Germán Bula Hoyos aprovecharon los vientos reformistas del gobierno nacional, el apoyo de la Alianza para el Progreso y los fondos de la Fundación Rockefeller y fundaron la Universidad de Córdoba, con orientación hacia las ciencias agrícolas como la agronomía, veterinaria y zootecnia. El reformismo agrario de los primeros años del Frente Nacional creó varias instituciones nacionales para apoyar su política agraria o reforzar otras más antiguas. Muestras de este sentimiento reformista fueron el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INCORA y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. Estos nuevos organismos dieron oportunidad de empleo a jóvenes profesionales no sólo en la capital, sino también en la provincia, y contribuyeron al crecimiento de las clases medias en Córdoba y particularmente en Montería en los años 60. Como recuerda un político prominente de la época: "esto

fue el inicio de la clase media profesional que no existía antes.⁴⁷ Las cifras a nivel nacional confirman la magnitud del incremento: en 1957 había 130.000 empleados públicos, los cuales sumaban 500.000 en 1972, 15 años más tarde.⁴⁸

El gasto en educación primaria y secundaria creció significativamente durante el Frente Nacional y tal vez fue la única política claramente redistributiva en este período.⁴⁹ Al mismo tiempo, sacerdotes católicos, jóvenes y ansiosos de predicar la solidaridad cristiana, organizaron grupos juveniles en las parroquias de Montería y ejercieron gran influencia en la formación política de los adolescentes urbanos. Sacerdotes españoles también participaron en esta campaña por poner en práctica el mandato de "preferencia por los pobres" del Concilio Vaticano II de 1963.⁵⁰ Empleados públicos, profesores de primaria, secundaria y universidad, influenciados por corrientes de la izquierda revolucionaria crearon sindicatos, los cuales se convirtieron en el escenario político de las ideologías socialistas y comunistas excluidas de la arena política por el Frente Nacional. El departamento de Córdoba no fue la excepción en esta tendencia nacional. El sindicalismo de los empleados públicos y maestros sirvió de medio en el cual versiones contestatarias ante las interpretaciones oficiales de la historia y el presente surgieron y se expandieron dentro de públicos más amplios. Ganaderos y políticos locales denunciaron la "demagogía izquierdista" en relación con la concentración de la tierra y el problema campesino, lo mismo que la "infiltración comunista en la educación"⁵¹. Mientras tanto, revolucionarios e intelectuales radicales responsabilizaron al sistema político de las élites terratenientes por ser explotador, represivo y bloquear la modernización económica.⁵² Estas interpretaciones opuestas sobre la historia y el régi-

men de gobierno contribuyeron a crear un campo de fuerza político polarizado, propicio a los hechos de fuerza antes que a la reforma, la negociación o los acuerdos.

El papel del sacerdote católico Camilo Torres fue influyente en la confluencia de ideologías socialistas y cristianas en Córdoba. Como representante de la Iglesia Católica en la junta directiva del INCORA, Torres fue uno de los más entusiastas adherentes a la distribución de tierras en favor de campesinos desposeídos, hasta el punto de enfrentarse abiertamente con sus superiores jerárquicos sobre este punto.⁵³ Uno de los proyectos de distribución de tierra más importantes del INCORA en los años 60 estuvo localizado en la Doctrina, al norte de Montería, donde el padre Torres jugó un papel decisivo en su éxito.⁵⁴ La censura de Torres en contra del egoísmo de los ricos dió aliento a los grupos radicales que por esos años empezaban a forjar un grupo de élites emergentes, opuestas al Frente Nacional y que iniciaron la reconstrucción de los lazos políticos entre el campo y la ciudad, rotos por la dinámica de cambio hacia una agricultura capitalista basada en la gran propiedad. Las comunidades cristianas de base se diseminaron por las áreas urbanas del departamento usando el evangelio como enseñanza política, mientras trataban de crear una alianza entre los excluidos por las políticas agrarias y la nueva dinámica mercantil, por un lado y los grupos marginados por el régimen liberal-conservador, por el otro.

Los campesinos y el Frente Nacional

La transformación en la zona rural de Córdoba no fue menos dramática que los cambios ocurridos en Montería. Para los campesinos cordobeses la

⁴³ Entrevista con Isabel Bolaños (1990).

⁴⁴ Entrevista con Rodrigo García (1990).

⁴⁵ Entrevista con Alejandro Jaramillo (1989).

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Entrevista con Miguel Escobar Méndez (1991).

⁴⁸ Francisco Leal (1991).

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Entrevista con Isabel Bolaños (1990).

⁵¹ Entrevista con Rodrigo García (1989).

⁵² Víctor Negrete (1981).

⁵³ Camilo Torres (1969).

⁵⁴ Entrevista con Germán Bula Hoyos (1989).

primera parte de la década del 60 representó la finalización de las tierras públicas disponibles para colonizar a lo largo del río Sinú y en la zona montañosa del sur del departamento.⁵⁵ La promesa de reforma agraria elevó las expectativas campesinas en los comienzos del Frente Nacional cuando grupos de campesinos invadían esporádicamente grandes latifundios o tierras marginales disputadas con los terratenientes en la Ciénaga Grande o en la salida del río Sinú al mar Caribe.

Los propietarios de tierras al temer que los aparceros o arrendatarios reclamaran la posesión de las parcelas como condición suficiente para demandar su propiedad legal, desalojaron a miles de campesinos de sus predios durante los años 60, en particular en el bajo y medio Sinú. Algunos migraron para trabajar en ranchos ganaderos en Venezuela o a las plantaciones de banano en la vecina Urabá; otros colonizaron tierras en el alto Sinú o en el noroeste del departamento, en los límites montañosos entre Urabá y Córdoba.⁵⁶ En el medio Sinú, en particular alrededor de Montería, la mayoría de los pequeños campesinos vendieron sus parcelas de subsistencia a grandes haciendas y algunos compraron terrenos sin limpiar en zonas de colonización, en el alto Sinú; otros fueron aún

más arriba, al parque nacional de Paramillo, a abrir fincas, no obstante que la colonización de los parques nacionales era ilegal.



La decisión del gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) de dar un impulso a la lánguida reforma agraria de 1961 incluyó la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC, en 1968. La asociación fue planeada para dotar de un instrumento institucional y organizativo a nivel nacional a los campesinos a través del cual pudieran canalizar sus intereses dentro de las diferentes instituciones, fortalecer su posición negociadora frente a los terratenientes y a los funcionarios estatales, a la vez que organizar un mecanismo mediante el cual el estado pudiera canalizar sus recursos.⁵⁷ La asociación tuvo un buen comienzo como resultado del apoyo financiero internacional y del respaldo del gobierno central. Sin embargo, en 1968 su actividad ya había unificado un poderoso frente de enemigos de la reforma en el congreso, mientras este grupo social continuó sin un aliado político significativo, fuera de comunistas y radicales, apoyo que en el contexto de la "guerra fría" fue más un estigma que una ayuda para influenciar el diseño de políticas.

Las condiciones favorables que le dieron nacimiento a la ANUC ya no existían después de 1970. La coalición que apoyó al presidente Conservador Misael Pastrana, el último presidente electo dentro del marco del Frente Nacional, era enemiga acérrima del programa de reforma agraria y tuvo como bandera de campaña un plan de desarrollo basado en la construcción como sector líder de la economía y en el traslado masivo de recursos a actividades urbanas. Además, esta coalición enfrentó en las elecciones una poderosa ola de descontento popular urbano y de élites regionales desafectas con el Frente Nacional, que agrupados en la Alianza Nacional Popular, ANAPO, consiguieron una importante proporción de los cargos de representación directa. El nuevo gobierno tuvo que maniobrar dentro de esta situación y el modelo económico que ofreció, creación de empleo para mano de obra poco calificada en la construcción y por tanto con salarios bajos, sirvió como mecanismo de negociación con la oposición.

El agrarismo reformista del gobierno de Carlos Lleras encontró no sólo opositores dentro de la ad-

ministración Pastrana, sino también dentro del nuevo partido de oposición, ANAPO, que en parte había agrupado a los terratenientes descontentos con las políticas de reforma social en el campo del anterior gobierno. Como consecuencia, la administración Pastrana redujo drásticamente el presupuesto para la reforma agraria y reorientó los recursos canalizados al sector rural hacia la agricultura comercial.⁵⁸ Las organizaciones campesinas reaccionaron con una ola masiva de invasiones de tierra a lo largo de todo el país en 1971 y 1972 y con menos intensidad en los años siguientes. El compromiso sólido y homogéneo de las élites políticas bipartidistas a favor de una modernización rural con base en la agricultura comercial, hizo evidente la falta de aliados políticos importantes de los grupos campesinos y llevó a una lenta pérdida de importancia de la ANUC en los años siguientes.

El latifundio, por largo tiempo el rasgo característico de la vida rural en la costa caribe colombiana, fue golpeado en sus cimientos por la ola de invasiones de tierra a comienzos de los años 70. Casi la mitad del total de invasiones que ocurrieron en el período estuvieron localizadas en la costa caribe y un tercio de ellas fue llevado a cabo en Córdoba y el vecino departamento de Sucre.⁵⁹ La movilización campesina en Córdoba se organizó más que todo en la Ciénaga Grande y al norte de Montería. La represión militar fue intensa y pocas peticiones de tierra fueron exitosas. En los casos en los que la tierra fue distribuida, los campesinos vendieron sus lotes a las haciendas adyacentes en los años siguientes debido a la falta de apoyo financiero y técnico. Rodrigo García Caicedo, gerente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, considera que ellos le hicieron un favor a los campesinos al comprarles la tierra, porque este grupo no estaba preparado para la propiedad, debido a que "su horizonte cultural permanece todavía en el período de

la vida nómada y no tienen ninguna ambición por el progreso. Además, ellos han tenido siempre acceso a la tierra a través de la aparcería."⁶⁰ García concluye que la acumulación de tierras fue producto de una transacción económica armoniosa, en la que no hubo ninguna usurpación y agrega que el Estado debió haber promovido un enfoque basado en la productividad, "apoyando el trabajo creativo del propietario, en lugar del rutinario del campesino."⁶¹

El fracaso de la reforma agraria, los efectos de la comercialización y el mercado sobre sus condiciones materiales y el uso de la coerción para solucionar sus reclamos, forjaron en varias generaciones de campesinos cordobeses una visión del mundo, de la historia y del papel del Estado en la que la rebelión armada era la única salida posible para construir un orden social que remediara los efectos negativos del mercado y del régimen político represivo. Grupos marxista-leninistas guiados por las enseñanzas de Mao Zedong sobre el papel de los campesinos en la construcción de una república popular, articularon un discurso y una práctica política en oposición a la explotación del mercado y la represión del gobierno. El Ejército Popular de Liberación fue fundado como parte de una organización políticomilitar de base campesina en el sur de Córdoba a mediados de los años 60. Este movimiento reclutó a campesinos jóvenes o semidesempleados que alternaban empleos temporales en las haciendas, en las ciudades, o migraban regularmente en busca de trabajo fuera del departamento, grupo generacional que entró en el mercado laboral a mediados de la década de los 70. La mayoría de ellos habían tenido parientes que participaron en la movilización campesina de los 60 y primera parte de los 70 de quienes recibieron una influencia o ejemplo directo para mantener viva la memoria colectiva de injusticia social y persecución política que contribuyó a forjar la identidad de esas nuevas generaciones.⁶²

⁵⁵ Entrevista con César Conde (1989) e Isabel Bolaños (1990).

⁵⁶ Entrevista con César Conde (1989).

⁵⁷ Kalmanovitz (1991), Zamosc (1986).

⁵⁸ Francisco Leal (1991) y Salomón Kalmanovitz (1991).

⁵⁹ León Zamosc (1986).

⁶⁰ Entrevista con Rodrigo García Caicedo (1990).

⁶¹ Ibid.

⁶² Gerard Martin y Claudia Steiner (1991).



NEGOCIACIONES DE PAZ, AUTONOMÍA MILITAR Y PARAMILITARES

Las negociaciones de paz de la década de los 80 revelaron hasta qué punto las Fuerzas Armadas habían ganado autonomía ante el gobierno central y ante el control de la ciudadanía. La brecha entre la política de paz del gobierno y la de contrainsurgencia del ejército era más evidente en las regiones donde la coincidencia de intereses entre fuerzas de contrainsurgencia del ejército, narcotraficantes, comerciantes y productores de ganado promovieron, financiaron y armaron grupos de autodefensa campesina para enfrentar la insurgencia en su propio terreno desde mediados de los años 80. Como los narcotraficantes se convirtieron en grandes inversionistas en tierra rural y urbana,⁶⁵ paulatinamente terminaron financiando y dotando de equipo a esos grupos de autodefensa, con apoyo táctico en inteligencia e información de las fuerzas de contrainsurgencia, las que habían sido sus patrocinadoras iniciales.

Mientras las negociaciones de paz se desarrollaban en Bogotá y otros escenarios internacionales, las regiones en donde los insurgentes tenían influencia eran campo de confrontaciones irregulares: asesinatos de políticos de izquierda y sindicalistas en las capitales departamentales y otras poblaciones menores, masacres de campesinos que eran respondidas con secuestros de ganaderos y comerciantes, robo de ganado y extorsión, todo dentro del marco de estado de sitio, o toque de queda y ley militar en algunas zonas. Bernardo Gutiérrez, comandante guerrillero de la columna del EPL que operaba en Córdoba, Urabá y el norte de Antioquia reconoció años más tarde: "la guerrilla y el ejército tenían una táctica de paz, dentro de una estrategia de guerra."⁶⁴

Hacia la segunda mitad de la década de los 80 los grupos de autodefensa campesina habían evo-

lucionado hacia poderosos escuadrones paramilitares⁶⁵ y pasaron a ser actores principales en contra de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla y a jugar un papel protagónico en la violencia política de finales de los años 80. La política clásica de contrainsurgencia convirtió parte de las mismas fuerzas del orden en factor desestabilizador de las negociaciones. Además, el entrenamiento de fuerzas irregulares, su financiación y la proliferación de armamento en las regiones en conflicto, resultado de esa misma política, crearon las condiciones para la lucha armada de múltiples facciones, en particular en la zona bananera de Urabá en donde los grupos paramilitares terminaron compitiendo con la guerrilla por el control territorial en los años 90.⁶⁶

El análisis de cómo un campo de fuerza político polarizado se convierte en campo de batalla, requiere una perspectiva interactiva de los cambios en las representaciones e ideas sobre el lugar y papel en la realidad inmediata de cada una de las partes en conflicto y cómo cambios en contextos más amplios activan ideologías, actitudes o supuestos que facilitan enfrentamientos violentos a niveles micro. Los efectos de estos cambios pueden ser lo suficientemente profundos como para producir modificaciones drásticas en la conducta de cada bando. En el caso de Colombia y la escalada de violencia de los años 80, la amnistía otorgada a casi 500 guerrilleros, en su mayoría pertenecientes al Movimiento 19 de Abril, M-19, fue un punto de quiebre para los actores envueltos en el conflicto. Lo que el gobierno de Belisario Betancur consideró como un acto de generosidad de parte de la sociedad colombiana que él representaba en el momento, parte del movimiento guerrillero lo evaluó como un reconocimiento de su peso político y militar. Por el contrario, los militares y ganaderos, los grupos sociales e institucionales que sentían en carne propia y con más cercanía la presión armada de la guerrilla, consideraron la amnistía como una traición del gobierno de turno. Desde este momento en adelante, los militares adoptaron una política de "no a los prisioneros, sí a los muertos en combate."⁶⁷



En Córdoba, los ganaderos adoptaron una posición más agresiva y anunciaron que “si los campesinos tienen el derecho de demandar tierra, los propietarios tienen el derecho de defenderla.”⁶⁸ Los políticos también se quejaron de que “la hostilidad campesina destruyó el antiguo orden.”⁶⁹ Mientras tanto, los grupos guerrilleros de la región buscaron incrementar su capacidad militar a ampliar sus actividades extractivas sobre los propietarios y comerciantes. Impusieron “impuestos revolucionarios” o donaciones periódicas pagadas en dinero o ganado. Los que no aceptaron esta “vacuna ganadera” fueron secuestrados y liberados a cambio de un rescate. Proprietarios y comerciantes pequeños y medianos fueron incluidos dentro del universo tributario, lo que creó reclamos contra las guerrillas. El ejército reaccionó y estableció una brigada militar en Montería en 1987, y paradójicamente, las masacres de campesinos, la desaparición de sindicalis-

tas o activistas políticos, y la violación de los derechos humanos aumentó desde entonces.⁷⁰

Lo que sorprende de la forma como evolucionaron los conflictos en Córdoba y Urabá es que el gobierno central no tuviera una política de intervención diferente a la de contrainsurgencia. La estrecha noción de seguridad interna basada en el crudo anticomunismo de la “guerra fría” terminó por convertirse en un factor de perturbación social peor que la “enfermedad” que pretendió combatir, al menos en el caso de Urabá, Córdoba y el bajo Cauca.

Faccionalismo y nuevas élites políticas

La escalada del conflicto violento de finales de los años 80 ocurrió en medio de condiciones particulares del sistema político cordobés, en particular el centrado en Montería. Redes políticas y económicas que emergieron y se consolidaron durante la modernización rural fragmentaron el espacio político del Sinú medio y la posibilidad de liderazgo de sus políticos. Hasta los años 50 la élite cordobesa tenía su base económica en el control de la tierra y la ganadería generaba la mayor parte de su ingreso. La poderosa y rica burguesía ganadera antioqueña y sus agentes comerciales que se ubicaron entre los mercados del interior del país y los ganaderos cordobeses, obtuvieron la parte del león en el negocio ganadero y limitaron las posibilidades de desarrollo de Córdoba, en particular de su parte central donde está ubicada Montería. El ganado en pie es transportado por tierra al mercado antioqueño, en donde existe una próspera industria alrededor de actividades derivadas de los subproductos del sacrificio del ganado. En cambio, las empacadoras o frigoríficos de carne son inexistentes en Córdoba, lo mismo que las curtidoras de pieles o la confección de artículos de cuero, lo cual limita las posibilidades de ingreso y empleo dentro de la región.

⁶⁸ Semana (1988).

⁶⁹ Rocio Londoño (1991), página 35.

⁶⁸ Alejandro Reyes (1990).

⁶⁶ Semana (1995).

⁶⁷ Olga Behar (1985).

⁶⁸ Entrevista con Rodrigo García Caicedo (1990).

⁶⁹ Entrevista con Miguel Escobar Méndez (1991).

⁷⁰ Cien Días, Cinep (1988-1990).

La experiencia en el manejo de la lógica del mercado y los valores inherentes a ella puede ser una explicación a esta situación.⁷¹ Los inversionistas y negociantes antioqueños han acumulado un gran conocimiento mercantil que se ha transmitido por generaciones desde las explotaciones de oro durante la colonia, mientras que los propietarios cordobeses son recién llegados a este mundo. Una parte importante de la riqueza originada en la ganadería abandona la región por diferentes canales, de ahí que la vieja élite de la tierra, debilitada por la modernización agraria de los años 60 y 70, no tuvo la base económica para reconstruir su preeminencia en el nuevo y cambiante ambiente económico y político de los años 70 en adelante.

Muchos propietarios de tierra vendieron sus fincas y se convirtieron en rentistas en Medellín, Cartagena o Barranquilla a aprovechar la reforma financiera de la administración Pastrana Borrero (1970-1974) que elevó los intereses al ahorro financiero en busca de canalizar recursos para la industria de la construcción urbana.⁷² Esta posibilidad permitió a muchos propietarios rurales una salida fácil de las nuevas condiciones en el campo. A los ojos de las élites de la tierra, la sociedad rural había perdido la armonía que alguna vez tuvo y los campesinos se convirtieron en enemigos de clase después de los años 70. Los ranchos inadvertidamente se volvieron inseguros y los casos de cuatrerismo se multiplicaron. La causa de este cambio, desde la perspectiva de los hacendados, fue la falta de autoridad y vigilancia militar.⁷³ Sin embargo, una evaluación sobre la violencia en áreas ganaderas, basada en entrevistas con hacendados, concluye que "existe una tendencia generalizada de los ganaderos hacia la evasión de todo tipo de responsabilidades legales hacia los trabajadores y un claro desinterés por cuestiones de beneficio público donde ellos no obtengan una ventaja."⁷⁴

Como se explicó más arriba, los primeros inversionistas antioqueños no reinvertían sus ganancias en territorio cordobés, sino en sus regiones de origen en el departamento de Antioquia. Por esto, uno de sus principales intereses era el de mantener

un buen clima de negocios en Córdoba. Los intentos de impulsar una reforma agraria durante los años 60 y el conflicto social que se desató posteriormente, llevaron a una renovación de los diferentes grupos de ganaderos antioqueños que tradicionalmente tenían intereses en el valle del Sinú. Los viejos inversionistas, pertenecientes a familias notables y de prestigio de Medellín (los Echavarría, Naranjo, Navarro, De Bedout, etc.) vendieron sus fincas a ganaderos y comerciantes de ganado recién enriquecidos y enemigos acérrimos de la redistribución de tierras.⁷⁵ En contraste con el paternalismo de los dueños anteriores, los propietarios nuevos no fueron aceptados tan fácilmente como sus antecesores. El campesino cordobés los consideró "explotadores" y demasiado "ambiciosos".⁷⁶ Las extensas porciones de tierra compradas por este grupo de negociantes emergente preparó el ambiente y animó a los narcotraficantes antioqueños a invertir sus utilidades en la compra de tierra en Córdoba unos años más tarde.

Otro factor que segmentó el viejo orden y debilitó la capacidad de la élite monteriana para sobrellevar los retos de la modernización agraria fue el arribo a la política de una nueva red de intereses políticos y económicos representada por políticos de ascendencia siriolibanesa desde inicios de los años 70. Aunque este grupo étnico había estado presente en esta región desde inicios del siglo XX, primero como comerciantes y tenderos y luego como prestamistas, sus miembros usaron la riqueza acumulada en estas actividades para adquirir tierras, factor que era la base del estatus social y del poder político en este departamento. Sus hijos fueron educados en Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá.⁷⁷ Aunque este grupo no formó un enclave étnico —sus hijos e hijas se casaron con vástagos de las élites locales— sí se constituyó en una poderosa red política y de negocios a lo largo de la costa caribe colombiana.

En los años 60, descendientes de siriolibaneses ya eran ganaderos, comerciantes y prestamistas prestigiosos y estaban participando directamente en las redes políticas del departamento, en particular

dentro del partido liberal. Como la élite terrateniente cordobesa era mayoritariamente conservadora y los liberales eran perseguidos antes del Frente Nacional, liberales y siriolibaneses entraron de la mano en el sistema político del departamento en los años 60, luego de que se firmó el acuerdo bipartidista del Frente Nacional entre los partidos tradicionales. Debido a que las viejas élites políticas controlaban los canales del clientelismo estatal, las redes políticas de los siriolibaneses eran limitadas y su participación atada a las jerarquías de los políticos liberales cordobeses. A pesar de esto, numerosos candidatos de ascendencia siriolibanesa participaron en las elecciones departamentales a finales de los años 70. Ellos tenían dinero y ambiciones, aunque la maquinaria política y el liderazgo regional estaba todavía en manos de la élite cordobesa. Por esta razón la práctica de la compra de votos en las elecciones y la participación de los llamados "turcos" con listas electorales propias aparecieron al mismo tiempo a finales de los años 70 y comienzos de los 80 a todo lo largo de la Costa Atlántica. Asegurar su acceso a los puestos de representación política era indispensable para controlar los recursos del clientelismo estatal, crear redes de poder y reproducir el "capital político",⁷⁸ todas estas condiciones necesarias para consolidar su posición económica ya alcanzada.

Al final de los años 80 la representación del departamento en el congreso, tradicionalmente en manos de las élites del partido liberal y conservador, tuvo que ser compartida con los nuevos contendores. Políticos siriolibaneses obtuvieron 4 de las 11 curules del congreso correspondientes al departamento de Córdoba.⁷⁹ Los crecientes gastos de la campaña electoral elevaron los costos de la actividad política y por tanto la probabilidad de canali-

zar recursos públicos hacia las campañas políticas privadas, lo cual coincidió con el enorme crecimiento de la corrupción en el gasto público, denunciado repetidamente en este período. El fenómeno parece que volvió a presentarse a mediados de los años 80, cuando grupos de narcotraficantes también buscaron hacer valer su dinero en la escena política en algunos municipios: "Las elecciones se convirtieron en una competición para comprar votos en algunas regiones a mediados de los años 80".⁸⁰

Así, la segmentación de la élite bipartidista en el proceso de modernización rural y la actividad intensiva en dinero en que se transformó la práctica política, convirtió la permanencia en los puestos de representación en una actividad riesgosa, volátil y más proclive a la violencia. Además, los retos presentados por los grupos guerrilleros al sistema político cordobés, fragmentado y sin liderazgo, agravaron sus limitaciones. En este contexto, Fidel Castaño y sus fuerzas paramilitares llenaron un vacío y los alarmados propietarios del departamento saludaron su ofensiva para detener lo que parecía un intimidante avance de las guerrillas.

Sistema político, paramilitares y oportunidad

En los años 80, las partes montañosas del sur y el oeste del departamento se convirtieron en un fortín de la insurgencia, agrupada ahora en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, con influencia no sólo en Córdoba sino en la vecina zona agroexportadora de Urabá.⁸¹ La proximidad a Montería de la Coordinadora sólo era un problema militar para las Fuerzas Armadas antes de la iniciación del proceso de paz en 1982. De ahí en adelante, la posibilidad de que los antiguos insurgentes

⁷¹ Joaquín Berrocal (1980) y entrevista con Miguel Escobar (1991).

⁷² Entrevista con Enrique Gómez Yances (1989).

⁷³ Jesus Antonio Bejarano (1988).

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Entrevista con Raul Navarro (1989).

⁷⁶ Entrevista con Francisco Velez y Gloria de Velez (1989).

⁷⁷ Entrevista con Jorge Farah (1990).

⁷⁸ Francisco Leal (1989).

⁷⁹ Entrevista con Andrés López (1990).

⁸⁰ Entrevista con Miguel Escobar (1991).

⁸¹ Rocío Londoño (1991).

entraran a formar parte del sistema político en el medio y alto Sinú como resultado de las negociaciones de paz, exacerbó las tensiones generadas por la fragmentación de los partidos tradicionales.

Durante las negociaciones de paz en los años 80, la Unión Patriótica y el Frente Popular ganaron paso a paso el derecho a ser miembros del sistema político departamental, a pesar de la fuerte oposición de liberales, conservadores y militares. En las elecciones para concejo y asamblea de 1984 alcanzaron 1.000 votos, y 4.000 en 1986. En la primera elección directa de alcaldes en 1988, las listas de estos dos grupos obtuvieron 2.000 votos de un total de 240.000 posibles; es decir, no más del 5% del voto total del departamento.⁸² Sin embargo, a pesar de la pequeña amenaza electoral que representaban estos dos partidos, grupos paramilitares atacaron a activistas y candidatos electos de esas dos agrupaciones durante el período pre y post electoral. La intensidad de las agresiones paramilitares en Montería, sede de la nueva brigada militar, impidieron toda actividad política de las agrupaciones diferentes a los partidos liberal o conservador.

En Tierralta, localizada en una zona más montañosa, en la que insurgentes controlaban territorio lejos del casco urbano del municipio y la población campesina era más numerosa que en cualquier otra zona del departamento, tal vez con excepción del vecino municipio de Valencia, el control de los grupos paramilitares sobre la población era más difícil,⁸³ hecho que permitió a los partidos de izquierda, la UP y el Frente Popular, aprovechar el faccionalismo de liberales y conservadores. En estas condiciones, aquellas élites excluidas de las coaliciones gobernantes en Tierralta durante el Frente Nacional, se aliaron con los candidatos de izquierda para oponerse a "el monopolio", nombre con el

que se conoció a las redes políticas dominantes. En la primera elección directa de alcaldes en 1988, Adonay Jaramillo, candidato de la coalición que incluía a la izquierda y a los desafectos con "el monopolio"; nieto de uno de los fundadores de Tierralta y cuyo padre había sido enemigo de "el monopolio" por muchos años, ganó la elección para alcalde y Alfonso Pacheco, candidato de la Unión Patriótica, fue elegido como vicepresidente del concejo municipal.

La dinámica del sistema político de Tierralta no encajó dentro de los planes de los paramilitares ni dentro de los de las fuerzas de contrainsurgencia las que reaccionaron enérgicamente y no dejaron posesionar al candidato comunista de su cargo en el Concejo ni tampoco conducir una vida política normal. Clandestinamente, Pacheco participaba en las sesiones del concejo a través de mensajes escritos que hacía llegar cuando podía.⁸⁴ Mientras tanto, Jaramillo, una vez en la alcaldía y bajo fuerte presión militar, rompió la coalición con la izquierda y formó otra que incluía a los antiguos grupos en el poder. Como en

Durante las negociaciones de paz en los años 80, la Unión Patriótica y el Frente Popular ganaron paso a paso el derecho a ser miembros del sistema político departamental, a pesar de la fuerte oposición de liberales, conservadores y militares.

Montería, la alianza de narcos y contrainsurgencia impidió la consolidación de los partidos de izquierda en el sistema político local, mientras se argumentaba que sus candidatos mantenían lazos con la guerrilla y que ésta promovía sus candidatos en las zonas rurales. Los partidos de izquierda respondieron a las acusaciones de los militares al replicar que la mayoría de su voto era urbano, zona en que los insurgentes no tenían una presencia significativa.⁸⁵

La localización del centro de operaciones de Fidel Castaño entre Montería y Tierralta explica en parte la fortaleza de la represión paramilitar en estas ciudades. La experiencia personal de Castaño y sus orígenes regionales y sociales pueden ayudar a

entender el porqué de su honda aversión en contra de los grupos de izquierda. Su padre, un ganadero mediano de Ituango, al norte de Antioquia y cerca de la frontera con Córdoba, murió de un ataque al corazón a finales de los años 70 mientras permanecía secuestrado por la guerrilla y su rescate era negociado. Ituango fue una fortaleza de la Iglesia Católica y de los Conservadores durante la Violencia de mitad de siglo y sus élites desarrollaron una fuerte ideología anticomunista basada en la demonización de liberales y comunistas.

Con todo, las montañosas zonas rurales del municipio sirvieron de refugio a radicales y rebeldes en los años 50 y la circulación de ideologías agraristas revolucionarias y de oposición al Estado central continuaron durante el Frente Nacional, para mantener una polarización ideológica latente en todo ese período. El ambiente volvió a radicalizarse en los años 70 debido a la reanudación de actividades guerrilleras, esta vez de orientación comunista y al aumento de la presión de la guerrilla sobre los ganaderos y negociantes prósperos de la región para extraer recursos. En medio de esta polarización de fuerzas el padre de Fidel Castaño murió, hecho que puede haber contribuido a su decisión de convertirse en cruzado en contra del comunismo y a forjar una visión vindicativa del orden social en el que los caudillos, su arrojo personal y la fuerza, orden y subordinación constituyen el eje de la convivencia. En los años 80, Castaño coordinó a aquellos que se vieron afectados por la ampliación del radio de acción de los grupos insurgentes en el medio y alto Sinú y financió la organización de grupos de auto-defensas campesinas, promovidos por el ejército y autorizados por la ley.

No obstante, el matrimonio de mutua conveniencia política entre Castaño y el Gobierno central no ha sido fácil. Antes del acuerdo tácito de amnistía en 1990, una unidad conjunta del cuerpo de élite del ejército y fuerzas de seguridad allanaron "Las

Tangas", uno de los principales ranchos de Castaño cerca a Montería y base de los paramilitares; allí encontraron enterrados los cuerpos de por lo menos 25 campesinos. Estos habían sido secuestrados semanas antes en Urabá, la vecina zona bananera y transportados en camión por los paramilitares de Castaño bajo el cargo de ser simpatizantes de la guerrilla. Castaño se enteró del allanamiento con anterioridad y evadió el cerco.

En otro *tour de force* entre las autoridades nacionales y Castaño, éste desafió a grupos reformistas dentro de la coalición de fuerzas del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) al boicotear un proyecto de distribución de tierras para 40 familias en la jurisdicción de El Volador, ubicada entre sus ranchos cerca a Montería. El programa fracasó vergonzosamente cuando pocos campesinos aparecieron en la ceremonia en la que el entonces gerente del INCORA, Carlos Ossa Escobar, se suponía que iba a entregar títulos de propiedad a los campesinos. Los pocos que aparecieron y se atrevieron a ocupar los predios asignados fueron encontrados muertos unas semanas más tarde y sus familias desbandadas. Sobrevivientes dicen que Castaño los acusó de haber ocupado esas tierras con apoyo de la guerrilla en el pasado, antes de que él hubiera comprado los ranchos a inicios de los años 80.⁸⁶

Hoy, la poderosa imagen de "Rambo" que el paramilitarismo de Castaño proyecta y cultiva con hechos reales, contrasta con la situación dispersa y débil de los campesinos cordobeses como actores colectivos. La agresión directa ha amenazado con demoler cualquier rasgo de identidad colectiva u organizativa forjado en la defensa de las condiciones de reproducción de este grupo social cordobés. El campesinado de este departamento fue el único en el país que no organizó ningún tipo de movilización de protesta por los efectos sociales de la política económica rural del gobierno de César Gaviria (1990-1994).⁸⁷

⁸² Entrevista con Andrés López (1990).

⁸³ Entrevista con Alfonso Pacheco (1989).

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Entrevista con Jaime González (1989).

⁸⁷ Campo Adentro, CINEP (1994).

Ciénaga Grande, modernización y conflicto

Finalmente, habría que considerar el caso en el que la modernización agraria, vía concentración de la tierra y consolidación de la ganadería extensiva, ocurrió sin confrontación violenta, aunque con intenso conflicto social. El área comprendida en el triángulo formado por Lorica, Cereté y Ciénaga de Oro en el norte del departamento, fue el centro de enconadas disputas por la tierra entre campesinos y terratenientes en los años 60 y 70.⁸⁸ Aunque la reforma agraria de los años 60 distribuyó alguna tierra a campesinos, el mayor impacto en esta región fue la inversión pública en infraestructura para el desarrollo y ampliación de la agricultura comercial en gran escala.⁸⁹ Junto con las siembras de sorgo, soya, ajonjolí, arroz, palma africana, maíz y algodón, que estaban siendo cultivados desde finales de los años 50, empresarios de origen siriolibanés invirtieron en un complejo agroindustrial para aumentar el valor agregado de los productos primarios, lo cual generó empleo y posibilidades de ingresos para diversos grupos sociales. En los años 80, mientras la intensidad del conflicto político afectaba el negocio de la ganadería en el Sinú alto y medio, la producción agrícola en la Ciénaga Grande aumentó significativamente.⁹⁰

La nueva carretera entre la Costa Atlántica y el interior del país inaugurada en los años 50, no introdujo mayores cambios dentro del sistema político de la Ciénaga Grande y consolidó las estructuras de poder y distribución de la riqueza vigentes. Los negociantes antioqueños no habían penetrado significativamente en la zona y las innovaciones empresariales han estado a cargo de los empresarios siriolibaneses quienes tienen fuertes vínculos económicos y políticos con Cartagena y Barranquilla. El empleo asalariado generado por la inversión de capital en la agro-industria y las actividades e ingresos generados a su alrededor contribuyeron a crear mayor legitimidad para las élites gobernantes de esta zona y también a tener un mayor control de los conflictos generados por la modernización rural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el crecimien-

to demográfico de la región ha sido cercano a cero en los años 60, 70 y 80 debido al éxodo campesino en busca de mejores oportunidades y a que la población campesina (pequeños propietarios y semisalariados) fue particularmente baja en comparación con la de Montería y Tierralta en el mismo período.⁹¹

Por otro lado, el sistema político no sufrió alteraciones significativas y la modernización agrícola no afectó las principales redes de poder como sí ocurrió en las otras dos regiones. Los conservadores continuaron agrupados alrededor de los descendientes del General Burgos, mientras los liberales continuaron cerca de las diferentes facciones siriolibanesas. A diferencia de lo que sucedió en Tierralta y Montería, liberales y conservadores no enfrentaron un reto importante por parte de la izquierda, y por tanto no se desarrolló un campo de fuerzas políticas polarizado que contribuyera a crear las condiciones para un enfrentamiento violento. Las primeras elecciones directas para escoger alcaldes en 1988 fueron ganadas fácilmente por los candidatos liberales y conservadores. La ausencia de rivales de la izquierda y de su contrapeso en el lado paramilitar mantuvo esta área fuera de la borrasca de violencia política que arrasó el resto del valle del Sinú en la segunda mitad de los años 80.



CONCLUSIÓN

El presente estudio examina tres casos diferentes de modernización agraria y expansión del latifundio ganadero en Colombia entre 1950 y 1990 y aplica un marco de análisis que propone una explicación de la violencia política en el valle del medio y alto Sinú a finales de los años 80. El trabajo hace énfasis en los cambios de los sistemas políticos locales, la resistencia a la trayectoria de modernización basada en la concentración de la tierra, la polarización del campo de fuerza político y la

interacción de actores locales con estructuras de oportunidades que promueven o inhiben la movilización colectiva. La investigación analiza las condiciones estructurales que crearon un ambiente propicio para el enfrentamiento violento en dos regiones del valle del Sinú en los años 80. En este sentido, es un ejercicio de análisis macrohistórico comparativo sensible a diferencias regionales y a mecanismos causales y responde a la pregunta de «cuáles son las condiciones que hacen más probable el uso de la violencia como instrumento político». El trabajo señaló que las probabilidades de violencia política son más altas cuando en un proceso de cambio estructural el sistema político sufre modificaciones significativas, existe una resistencia a los efectos de la trayectoria del cambio por aquellos que son afectados negativamente y las oportunidades para la movilización son favorables debido a variaciones en el contexto político.

El artículo también explora, aunque con menos profundidad y detalle la formación regional de identidades políticas en conflicto, cómo la memoria colectiva local de confrontaciones anteriores continúa operando en el presente, y cómo ésta contribuye a la polarización de campos de fuerza político forjados en la experiencia de resistencia y dominación. Esta línea de análisis sobre la formación de identidades colectivas, resistencia y campos políticos es un punto en el cual debería hacerse más énfasis en futuros trabajos. Su estudio permite apreciar más claramente la interacción entre agentes sociales y configuraciones de poder solidificadas en el proceso histórico y los motivos y creencias, no sólo los intereses moldeados en esa dinámica. En el caso de Córdoba, el papel jugado por los intermediarios culturales de ambos polos -intelectuales de izquierda, dirigentes gremiales y sindicales, propaganda del ejército, periódicos y medios, etc.- en la recreación de la memoria colectiva, el sentido de la historia y el papel del Estado y de la interpretación de los conflictos cotidianos entre clases y grupos sociales, con-

tribuye a comprender un aspecto de la polarización del campo político en esta región durante los años 80. La creación de estereotipos y caricaturas de opositores partidistas o grupos sociales antagonistas, o la dehumanización, marginamiento y estigmatización de actores con orientaciones ideológicas diferentes, característicos de la propaganda anticomunista o en algunos casos del proselitismo revolucionario, crearon un ambiente propicio para la eliminación física de los opositores.

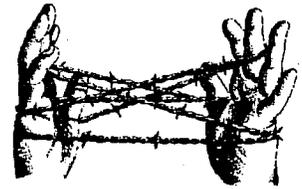
El trabajo también muestra el peso político y la influencia institucional de los intereses ligados a la ganadería extensiva y a la agroindustria en Córdoba, e indirectamente en Colombia. Estos han contribuido a la reproducción de sólidas alianzas políticas a nivel nacional, las cuales han favorecido la monopolización de la tierra rural y urbana. Así mismo, estos intereses ganaderos y agroindustriales han moldeado unas estructuras políticas locales que han sido resistidas y rechazadas energicamente aunque sin mucho éxito por grupos significativos de colombianos, los cuales no han consolidado un vocero político reconocido que haga oír su voz a la hora de las decisiones en medidas políticas. La suerte de los proyectos alternativos de modernización rural parece que quedó sellada en la elección presidencial de 1970, cuando la coalición triunfadora y su oposición electoral coincidieron en una masiva transferencia de recursos a la construcción urbana y en un apoyo irrestricto a la agricultura comercial de gran escala. Desde entonces la protesta rural como denuncia de los efectos sociales de ese camino de modernización agraria pasó a ser un problema exclusivo de orden público con algunas coyunturas favorables durante el proceso de paz de los años 80 cuando por lo menos se reconoció la justeza de las reivindicaciones. Las barreras institucionales o estructurales para la organización gremial y política de los campesinos, la incapacidad para forjar alianzas con sectores políticos con mayor peso institucional, o la negativa de éstos, puede explicar en parte la

⁸⁸ León Zamosc (1986).

⁸⁹ Entrevista con Victor Negrete (1990).

⁹⁰ Jesús Antonio Bejarano (1988).

⁹¹ Mauricio Romero (1989).



unas prácticas políticas y de coerción con conocidos antecedentes en la historia rural colombiana. La forma de centralización política, basada en un bipartidismo fragmentado regionalmente y en la que las redes de poder local han determinado gran parte de sus prerrogativas, en contraste con otras posibilidades de centralización en donde el desarrollo regional de una tecnocracia dependiente del Estado central permite un espacio público más diferenciado de los intereses locales, ha permitido una práctica política con gran autonomía de los controles del Estado central y en la cual los derechos legales de los sectores subalternos tienen grandes obstáculos para ser implementados.

Un elemento nuevo en el contexto colombiano lo constituye la proliferación de armas y de recursos invertidos en la confrontación armada, originados en el narcotráfico, la dotación de armas a los grupos de autodefensa por el ejército, la extracción de recursos a los sectores productivos por los guerrilleros y la financiación de los empresarios y ganaderos a los paramilitares. En el corto plazo, esta enorme inversión de esfuerzos y recursos contrasta con los tímidos esfuerzos por llegar a acuerdos negociados. En el largo plazo, la persistente resistencia armada de sectores sociales y regionales contra el régimen político y los sectores que lo conforman y las consecuencias del tráfico de drogas, bien sea mediante el aumento del número de armas disponibles dentro de la población y sin ningún control de las autoridades legales, o mediante el fortalecimiento de magnates regionales que compiten en autoridad y poder con el Estado central, han puesto de presente la dificultad para consolidar la legitimidad y la capacidad del Estado con este período histórico.

Para futuras investigaciones, un punto que merece una discusión y análisis particular es la concepción y supuestos sobre seguridad nacional y orden público que hasta el momento han sido aplicados por las fuerzas armadas colombianas en regiones como el departamento de Córdoba o la vecina región bananera de Urabá. Sin duda, la contrainsurgencia pura y llana de la «guerra fría» ha sido uno de los elementos que ha contribuido a la agudización y

persistencia del conflicto. Si se juzga por el número de muertes violentas y la seguridad de la ciudadanía, los resultados de esas políticas no pueden ser más desalentadores. El caso de Córdoba durante la década de los 80 es un ejemplo de ese fracaso.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- | | | |
|--|-------|--|
| Castañeda, Jorge G. | 1993 | <i>Utopia Unarmed. The Latin American Left After the Cold War</i> , Knopf. |
| Conniff, Ruth | 1992 | «Colombia's Dirty War, Washington's Dirty Hands», <i>The Progressive</i> , 56:5. |
| Dorner, Peter | 1992 | <i>Latin American Land Reforms in Theory and Practice. A Retrospective Analysis</i> , The University of Wisconsin Press. |
| Font, Mauricio | 1990a | <i>Coffee, Contention, and Change in the Making of Modern Brazil</i> , Basil Blackwell. |
| | 1990b | «Export Agriculture and Development Path: Independent Farming in Comparative Perspective», <i>Journal of Historical Sociology</i> , 3:4. |
| Gallo, Carmenza | 1991 | <i>Taxes and State Power. Political Instability in Bolivia, 1900-1950</i> , Temple University Press. |
| Goodwin, Jeff and Theda Skocpol | 1989 | «Explaining Revolutions in the Contemporary Third World», <i>Politics and Society</i> , 17:4. |
| Katznelson, Ira | 1986 | «Working Class Formation: Constructing Cases and Comparisons», in <i>Working-Class Formation. Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States</i> , editado por Ira Katznelson y Aristide Zolberg, Princeton University Press. |
| Ludtke, Alf | 1979 | «The Role of State Violence in the Period of Transition to Industrial Capitalism: The Example of Prussia from 1815 to 1848», <i>Social History</i> , 4: 2. |
| Mann, Michael | 1986 | «The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanism and Results», <i>States in History</i> , editado por John A. Hall, Basil Blackwell. |
| Meyer, David S. | 1994 | «Political Opportunity after the Cold War», <i>Peace and Change</i> , 19:2. |

- Moore Jr., Barrington** 1966 *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, Beacon Press.
- Paige, Jeffery** 1989 'The Social Origins of Dictatorship, Democracy and Socialist Revolution in Central America,' artículo presentado en la reunión anual de ASA.
- 1975 *Agrarian Revolution. Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, University of California Press.
- Roy, Beth** 1994 *Some Trouble with Cows. Making Sense of Social Conflict*, University of California Press.
- Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn Huber Stephens, y John D. Stephens** 1992 *Capitalist Development and Democracy*, University of Chicago Press.
- Rule, James** 1988 *Theories of Civil Violence*, University of California Press.
- Skocpol, Theda** 1986 'Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research,' en *Bringing the State Back In*, editado por Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, y Theda Skocpol, Cambridge University Press.
- 1982 'What Makes Peasant Revolutionary?' *Comparative Politics*, 14:3.
- Somers, Margaret** 1992 'Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation.' *Social Science History* 16:4.
- Stephens, John D.** 1989 'Democratic Transition and Breakdown in Western Europe, 1870-1939: A Test of the Moore Thesis,' *American Journal of Sociology*, 94:5.
- Tarrow, Sidney** 1989 *Struggle, Politics, and Reform: Collective Action, Social Movements, and Cycles of Protest*, Occasional Paper #21, Center for International Studies, Cornell University.
- Tilly, Charles** 1994 *Citizenship, Identity, and Social History*, Working Paper # 205, Center for Studies of Social Change, New School for Social Research.
- 1990 *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*, Basil Blackwell.
- 1986 'Does Modernization Breed Revolutions?,' en *Revolutions*, editado por Jack Goldstone, HBJ Publishers.

- Wolf, Eric R.** 1986 'Peasant Rebellion and Revolution,' *Revolutions*, editado por Jack A. Goldstone, HBJ Publishers.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE COLOMBIA

1- Libros y artículos.

Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC

- 1973 'Consideraciones Sobre la Lucha en el Campo Colombiano,' *La Tierra en Colombia*, editorial La Oveja Negra. Behar, Olga, ed.

- 1985 *Las Guerras de la Paz*, Planeta Editores.

Bejarano, Ana María and Alejandro Reyes

- 1988 'Conflictos Agrarios y Luchas Armadas en la Colombia Contemporánea: Una visión Geográfica,' *Análisis Político* [Bogotá, Colombia], 5.

Bejarano, Jesús Antonio

- 1988 'Efectos de la Violencia en la Producción Agropecuaria,' *Coyuntura Económica* [Bogotá, Colombia], 18:3.

Berrocal, Joaquín

- 1980 *La Colonización Antioqueña en el Departamento de Córdoba*, Montería. Berry, Albert, Ronald G. Hellman, y Mauricio Solaún, eds., 1980 *Politics of Compromise*, Transaction Books.

Burgos Puche, Remberto

- 1965 *El General Burgos*, editorial ABC. Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP
- 1988-90 *100 Días Vistos por CINEP*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Departamento de Derechos Humanos. 1994 'La Protesta Campesina en el Período Gaviria,' *Campo Adentro*, 3:11.

De Botía, Luis, and Rodolfo Escobedo

- 1979 'La Violencia en el Sur del Departamento de Córdoba,' tesis, departamento de Ciencia Política,, Universidad de los Andes.

De la Torre y Miranda, Antonio

- 1794 *Noticias Individuales de las Poblaciones Nuevamente Fundadas en la Provincia de Cartagena*, Santa María, España.

Exbrayat, Jaime

1971 *Historia de Montería*, Imprenta Departamental de Córdoba.

Fals Borda, Orlando

1976 *Capitalismo, Hacienda y Poblamiento en la Costa Atlántica*, Punta de Lanza. García Tordesillas, José F.

1976 *Causas y Efectos de la Violencia en el Alto Sinú*, San Pedro de Urabá.

González, Fernán E.

1994 •Poblamiento y Conflicto Social en la Historia Colombiana,• en *Territorios, Regiones, Sociedades*, editado por Renán Silva, Universidad del Valle-Cerec.

1989a •Un País en Construcción,• en Poblamiento, Problema Agrario y Conflicto Social, editado por Fernán González, *Controversia* 151-152, CINEP.

1989b •Una Aproximación a la Configuración Política de Colombia,• en Estado, Instituciones y Cultura Política, editado by Fernán Gonzalez, *Controversia* 153-154, CINEP.

Hartlyn, Jonathan

1992 •Civil Violence and Conflict Resolution: The Case of Colombia,• en *Stopping the Killing: How Civil Wars End*, editado por Roy Licklider New York University Press.

1988 *The Politics of Coalition Rule in Colombia*, Cambridge University Press.

Kalmanovitz, Salomón

1991 •Desarrollo Capitalista del Campo Colombiano,• *Colombia Hoy*, Siglo XXI.

Leal, Francisco

1992 •Surgimiento, Auge y Crisis de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y Colombia,• *Análisis Político*, 15.

1991 •El Estado Colombiano: Crisis de Modernización o Modernización Incompleta?,• *Colombia Hoy*, Siglo XXI.

1989 •El Sistema Político del Clientelismo,• *Análisis Político*, 8.

LeGrand, Catherine

1989 •Colonization and Violence in Colombia: Perspectives and Debates,• *Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies*, 14:28.

1986 *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1830-1936*, University of New Mexico Press.

Londoño, Rocío

1991 •Del Ejército Popular de Liberación, EPL, a Esperanza, Paz y Libertad,• *Cuadernos por la Democracia*, 3.

Martin, Gerard and Caludia Steiner

1991 •El EPL: Reinserción y Política Social,• *Cuadernos por la Democracia*, 3. Meisel, Adolfo

1980 •La Esclavitud, Mestizaje y Hacienda en la Provincia de Cartagena: 1553-1851,• *Desarrollo y Sociedad*, CEDE, vol. 4.

Negrete, Victor

1991 •Historia de la Violencia en Córdoba,• *La Revista*, 14, Academia de Historia de Córdoba.
1991a •Fundación por la Paz de Córdoba: De la Violencia a la Paz?,• *La Revista*, 14.

1981 *Historia de las Luchas Agrarias en Córdoba*, Montería.

Ocampo, Gloria Isabel

1986-88 •Hacienda, Parentesco y Mentalidad: La Colonización Antioqueña en el Sinú,• *Revista Colombiana de Antropología*.

Oquist, Paul

1980 *Violence, Conflict, and Politics in Colombia*, Academic Press. Palacios de la Vega, Joseph

1955 *Diarios de Viajes entre los Indios y Negros de la Provincia de Cartagena en el Nuevo Reino de Granada*, Editorial ABC.

Parsons, James

1949 *Antioqueño Colonization in Western Colombia*, California University Press.

Pécaut, Daniel

1994 •Es Posible Aún una Interpretación Global de los Fenómenos Recientes de Violencia en Colombia?,• en *Boletín Socioeconómico* [Cali, Colombia], 27.

1992 •Guerrillas and Violence,• en *Violence in Colombia. The Contemporary Crisis in Historical Perspective*, editado por Charles Berquist, Ricardo Peñaranda, y Gonzalo Sánchez, Scholarly Resources.

1988 *Crónica de Dos Décadas de Política Colombiana, 1968-1988*, Siglo XXI editores.

Posada, Eduardo

1988 •La Ganadería en la Costa Atlántica Colombiana, 1870-1950, • *Coyuntura Económica*, 18:3, Fedesarrollo.

Reyes, Alejandro

1990 •La Violencia y la Expansión Territorial del Narcotráfico, • *Economía y Política del Narcotráfico*, editado por Juan Tokatlian and Bruce Bagley, Uniandes-Cerec.

Romero Mauricio

1992 •Crisis de la Exclusión: Insurgencia Armada, Sistema Político y Narcotráfico, • artículo presentado en el panel Residual Insurgencies: Revolution and Guerrillas in the Post-Cold War Era, Annual Fall Meeting, New England Council of Latin America Studies, Boston University.

1989 •Informe de Investigación sobre Córdoba, • Proyecto Conflicto Social y Violencia, CINEP.

Sánchez, Gonzalo

1989 •Violencia, Guerrillas y Estructuras Agrarias, • *Nueva Historia de Colombia*, vol. II, Planeta. 1989 •La Violencia: de Rojas al Frente Nacional, • *Nueva Historia de Colombia*, vol. II, Planeta. *Semana*

1995 •La Otra Coordinadora, • #669.

1988 •El Narco-agro, • #343.

Steiner, Claudia

1989 •En Urabá Dos Historias, • Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

Striffer, Luis

1922 *El Río Sinú.*

Torres, Camilo

1969 *Revolutionary Writings*, Herder and Herder. Zambrano, Fabio

1989 •Ocupación del Territorio y Conflictos Sociales en Colombia, • *Controversia* 153-154, CINEP.

Zamosc, León

1992 •Transformaciones Agrarias y Luchas Campesinas en Colombia: Un Balance Retrospectivo (1950-1990), • *Análisis Político*, 15.

1990 •The Political Crisis and the Prospects for Rural Democracy in Colombia, • *The Journal of Development Studies*, 26:4.

1986

The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981, Cambridge University Press.

2- Entrevistas.

Bolaños, Isabel (activista estudiantil en la década de los 60's e hija de Santiago Bolaños, comerciante y agricultor), Montería, 1990.

Bula Hoyos, Germán (antiguo gobernador y senador Liberal del departamento de Córdoba y antiguo ministro de agricultura), Bogotá, 1989.

Conde, César (líder campesino, vereda El Diamante, perteneciente al municipio de Tierralta), El Diamante, 1989.

Escobar Méndez, Miguel (exalcalde de Montería, antiguo senador conservador por el departamento de Córdoba, y exministro de justicia), Bogotá, 1991.

Farah, Jorge (nacido en la sección cristiana de Damasco, migró a Colombia a la edad de dos años), Montería, 1990.

García Caicedo, Rodrigo (gerente de la Federación de Ganaderos de Córdoba), Montería, 1990.

Gómez Yances, Enrique (líder estudiantil en los años 60's en Montería), Bogotá, 1989.

González, Jaime (campesino, sobreviviente de la masacre en El Volador, jurisdicción de la municipalidad de Tierralta), Tierralta, 1989.

Jaramillo, Alejandro (nieto de uno de los fundadores de Tierralta y padre del primer alcalde electo por voto directo en Tierralta), Tierralta, 1989.

López, Andrés (antiguo delegado a la asamblea departamental de Córdoba, representante a la cámara por el departamento de Córdoba, y líder del Frente Popular), Bogotá, 1990.

Navarro, Raul (hijo de Ignacio Navarro, antiguo administrador antioqueño del rancho Marta Magdalena, de propiedad de los descendientes del general Pedro Nel Ospina, y ganadero importante en Córdoba en los años 50), Medellín, 1989.

Negrete, Victor (secretario de la oficina de planeación del departamento de Córdoba y autor de varios libros sobre el desarrollo social y económico de Córdoba), Montería, 1989.

Orozco, Pascual (historiador y miembro de la Academia de Historia de Córdoba), Montería, 1989.

Pacheco, Alfonso (vicepresidente del concejo municipal de Tierralta y líder de la Unión Patriótica en el departamento de Córdoba), Tierralta, 1989.

Vélez, Francisco y Gloria de Vélez (ganaderos antioqueños en el noroeste de Córdoba), Medellín, 1989.

• • • • •